



## Asamblea General

Distr. general  
27 de febrero de 2012  
Español  
Original: inglés

---

**Consejo de Derechos Humanos  
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria en su 60º período de sesiones  
(2 a 6 de mayo de 2011)**

**Nº 11/2011 (Arabia Saudita)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de enero de 2011**

**Relativa a: Ali ben Mohamed Hamad Al Qahtani**

**El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad un carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin la posibilidad de entablar un recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. El caso que se menciona a continuación fue comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como sigue: Ali ben Mohamed Hamad Al Qahtani, (en adelante, Sr. Al Qahtani), de 35 años, nacional de la Arabia Saudita, casado y padre de cuatro hijos, con residencia habitual en Khamees Masheet (Arabia Saudita) y, de profesión, comerciante.

4. Según la información recibida, el 31 de enero de 2004, el domicilio del Sr. Al Qahtani fue objeto de un registro sin orden judicial, por agentes fuertemente armados del Servicio de Investigación de la Arabia Saudita (Al-Mabahith Al-Ammah). El Sr. Al Qahtani fue detenido durante la incursión sin que se le presentase una orden de detención ni comunicasen las razones de esta. La fuente señala que los Servicios de Investigación trasladaron al Sr. Al Qahtani a la prisión de Abha, donde fue sometido presuntamente a tortura y malos tratos.

5. La fuente afirma que, a principios de 2010, el Sr. Al Qahtani fue trasladado de Abha a la prisión de Al Hayr, donde permaneció recluido durante tres meses en una celda en régimen de aislamiento. Según la información recibida, el Sr. Al Qahtani intentó suicidarse debido a las presuntas torturas físicas y psicológicas sufridas. La fuente indica que, desde entonces, el Sr. Al Qahtani presenta tos crónica y podría haber contraído una neumonía. Al parecer, el Sr. Al Qahtani no ha tenido acceso a asistencia médica adecuada.

6. Según la información recibida, se permite al Sr. Al Qahtani recibir visitas de su familia, con carácter mensual y bajo vigilancia. Su familia vive a unos 1.000 km de la prisión, lo que dificulta el seguimiento de las condiciones de detención y el estado de salud del Sr. Al Qahtani. Por otra parte, hasta la fecha, se ha prohibido al Sr. Al Qahtani comunicarse con un abogado y no se han practicado diligencias judiciales en casi siete años transcurridos desde su detención. El Sr. Al Qahtani no ha comparecido ante un juez ni ha sido imputado formalmente. El 19 de octubre de 2010, el hermano del Sr. Al Qahtani presentó una denuncia ante el Tribunal de Reclamaciones de Riad contra el Servicio de Investigación, responsable de la detención del Sr. Al Qahtani.

7. De conformidad con el artículo 36 de la Ley fundamental de gobernanza de la Arabia Saudita, "[e]l Estado velará por la seguridad de todos los ciudadanos y de todas las personas residentes en su territorio. Nadie será recluido, detenido o encarcelado sino en los casos y la forma que las leyes prescriban". Además, el artículo 35 de la Ley de procedimiento penal (Real Decreto N° M/39, de 16 de octubre de 2001) establece que "[t]oda detención deberá practicarse en razón de una orden de la autoridad competente". En ese artículo se especifica, además, que "se informará también a la persona detenida de las razones de su detención". Por otra parte, el artículo 2 de la Ley de procedimiento penal establece que "nadie será detenido, registrado, retenido o encarcelado salvo en los casos previstos por la ley". Al parece el Sr. Al Qahtani no ha sido informado en ningún momento de las razones de la detención.

8. La fuente señala que el artículo 2 de la Ley de procedimiento penal establece que "la duración de la detención o privación de libertad (...) será fijada por la autoridad competente". La fuente sostiene que el Sr. Al Qahtani no ha sido objeto de un procedimiento judicial, no ha comparecido ante un juez u otra autoridad competente y no ha sido informado de la duración de la privación de libertad. Además, de conformidad con el artículo 114 del Real Decreto, el período de reclusión preventiva no podrá superar los cinco días, si bien podrá prorrogarse hasta un total de seis meses. El Sr. Al Qahtani lleva recluido casi siete años. De conformidad con el artículo 114, el Sr. Al Qahtani debería "comparecer inmediatamente ante un tribunal competente o (...) ser puesto en libertad".

9. Es más, el artículo 4 de la Ley de procedimiento penal prevé "el derecho a solicitar la asistencia de un abogado o representante que lo defienda durante las fases de investigación y enjuiciamiento". Según la fuente, el Sr. Al Qahtani no ha tenido acceso a asistencia letrada desde su detención el 31 de enero de 2004.

#### *Respuesta del Gobierno*

10. El Grupo de Trabajo envió una comunicación al Gobierno el 19 de enero de 2011 y lamenta que no se haya recibido una respuesta en el plazo establecido de 90 días. El Gobierno tampoco ha pedido un plazo adicional para responder conforme a lo dispuesto en los párrafos 15 y 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

#### **Deliberaciones**

11. Pese a que no ha recibido una respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que, sobre la base de la información de que dispone, está en condiciones de emitir una opinión sobre la detención y privación de libertad del Sr. Al Qahtani de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo.

12. Los hechos expuestos por la fuente sobre los que, lamentablemente, no se ha recibido respuesta del Gobierno ponen de manifiesto un patrón continuado de violaciones de diversos derechos humanos, como el derecho a no ser detenido sin una orden judicial, a tener acceso a un abogado y a comparecer ante un juez en un plazo determinado, a ser informado de la acusación o las acusaciones imputadas y a un juicio justo. Además, existen ciertos principios fundamentales mínimos para el tratamiento de los detenidos, como el derecho a no ser maltratado, torturado o recluido en régimen de aislamiento, así como el derecho a asistencia médica en caso de enfermedad. De la información recibida se desprende que, en el caso del Sr. Al Qahtani, no se han respetado esos derechos y que continúa preso sin conocer las razones que han motivado la privación de libertad.

13. El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que "[n]adie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". Tanto el Comité de Derechos Humanos como la antigua Comisión de Derechos Humanos han aclarado que el aspecto fundamental de este derecho es la posibilidad de oponerse a la legalidad de la detención. En la resolución 1992/35, aprobada por la antigua Comisión de Derechos Humanos el 28 de febrero de 1992, se instó expresamente a todos los Estados a establecer un procedimiento como el *habeas corpus* a fin de que todas las personas privadas de libertad puedan promover un proceso judicial ante un tribunal para que decida, sin dilaciones indebidas, si la detención es lícita y ordene la puesta en libertad si la detención resulta ser ilegal. El Sr. Al Qahtani no solo no ha podido oponerse a la legalidad de su detención ante un juez o tribunal competente, sino que continúa privado de libertad de manera indefinida en contravención del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

14. Al no haberse iniciado actuaciones judiciales, y mucho menos un juicio justo, la reclusión del Sr. Al Qahtani vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio 1 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados y el principio 18 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

15. El Grupo de Trabajo observa con preocupación de que la reclusión prolongada del Sr. Al Qahtani y las presuntas torturas a las que ha sido sometido han dado lugar a problemas psicológicos y puesto en peligro su vida (la fuente ha informado de que intentó suicidarse en un momento de desesperación). Además, parece que debido a la privación continuada de libertad en una celda helada ha desarrollado tos crónica y posiblemente haya contraído una neumonía. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno del Reino de la Arabia Saudita las obligaciones jurídicas contraídas en tanto que Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

16. El Grupo de Trabajo observa que esta situación no constituye un caso aislado. Como se ha señalado en opiniones anteriores del Grupo de Trabajo, en particular en las opiniones N° 36/2008, N° 37/2008, N° 22/2008, N° 21/2009, N° 2/2011 y N° 10/2011, un número considerable de personas han sido detenidas y privadas de libertad sin que mediara una orden judicial, sin comparecer oportunamente ante un juez, sin acceso a un abogado y sin la celebración de un juicio. Además, en el caso del Sr. Al Qahtani, en lugar de imputarlo y juzgarlo con las debidas garantías procesales, el Gobierno lo mantiene recluido indefinidamente.

### **Decisión**

17. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Al Qahtani es arbitraria por cuanto se inscribe en las categorías I y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, carece de fundamento jurídico y contraviene los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

18. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Arabia Saudita que proceda a la inmediata puesta en libertad del Sr. Al Qahtani y ajuste su situación a las normas y principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

19. El Grupo de Trabajo solicita asimismo al Gobierno de la Arabia Saudita que proporcione una reparación adecuada al Sr. Al Qahtani y a su familia.

20. El Grupo de Trabajo invita al Gobierno de la Arabia Saudita a que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobada el 4 de mayo de 2011.]